

Financiamiento electoral ilícito en Guatemala



Tabla de Contenidos

1. El dinero de los Zetas y la campaña de Colom en Guatemala	3
‘Yuyo’ y Turcios	5
Ganar en el campo para ganar el país	7
Visita de Los Zetas al palacio presidencial	10
Ambición mortal	13
La defensa de Colom	16
Guerra contra los narcos	18
2. Política en Guatemala y la teoría del eterno retorno del Partido Patriota	20
Campañas y empresas	22
Una foto vale más que mil abogados	24
El PP coopta al Estado	26
El botín del ministerio	28
El fin del eterno retorno	30
3. El “pecado original” del presidente Jimmy Morales y de Guatemala	33
El candidato empieza a atraer al dinero	35
Las primeras alarmas	37
La espiral que amenaza al presidente	39
Jimmy Morales va a la guerra	41
El FCN-Nación y las élites	44
La soledad del presidente	46



1. El dinero de los Zetas y la campaña de Colom en Guatemala

Steven Dudley

En el primero de tres artículos dedicados a las contribuciones ilícitas a campañas políticas en Guatemala, analizamos la candidatura presidencial de Álvaro Colom en 2007. Colom, el erudito exdirector de una importante agencia de desarrollo, ganó las elecciones con la ayuda de dudosos operadores, como Obdulio Solórzano, quien supuestamente obtuvo apoyo financiero de grupos del crimen organizado de México y Guatemala. Este artículo rastrea el ascenso de Solórzano, así como su estrepitosa y sangrienta caída.

El 27 de diciembre de 2010, el locutor de una estación de radio de un municipio en las montañas del centro de Guatemala, quien solía emitir noticias, música y programas de interés comunitario, comenzó a leer un comunicado de prensa.

“Este mensaje es para el presidente de Guatemala. Somos el grupo de Los Zetas y solo queremos que el país sepa que el presidente Álvaro Colom recibió US\$11.500.000 antes de que terminaran las elecciones”, leyó el locutor, evidentemente apurado (Vea la transcripción [aquí](#)).

El anuncio, emitido aquella mañana por [Radio La Buena](#), estremeció a los habitantes de la ciudad de Cobán. Uno de ellos detuvo su auto, sacó su teléfono y grabó la transmisión.

Colom, un exempresario de buenas maneras, había llegado a la presidencia presentándose como el antídoto contra la corrupción y el favoritismo hacia las élites. Pero el costo de su ascenso al poder fue alto —hubo rumores de que había aceptado dineros de narcotraficantes guatemaltecos y mexicanos para su campaña, a través de un excongresista llamado Obdulio Solórzano y otros operadores de campaña—.

El comunicado se refería a estos rumores y dejaba claro que fuera cual fuera el trato que se hubiera hecho, se conocería muy pronto.

“El mensaje lo manda la persona que entregó el dinero (al presidente)”, continuó leyendo el locutor. “Tiene las matrículas de carro y las direcciones donde fue entregado el dinero, y usted, señor presidente, es el que le vendió el país a Los Zetas”.

El partido político de Colom, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es uno de los más antiguos de Guatemala, y hasta ahora ha logrado evadir las graves acusaciones que han debido enfrentar otros partidos políticos por sus esquemas de financiación. Desde el actual partido de gobierno, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), pasando por el Partido Patriota (PP), hasta la UNE, los partidos políticos de Guatemala están enfrentando una ola de enjuiciamientos sin precedentes. De estos tres, solo el FCN-Nación continúa activo como partido, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya ha comenzado con [el proceso para cancelarlo](#), incluso en un momento en que el presidente Jimmy Morales intenta aferrarse al poder.

A nivel personal, Colom ha logrado refutar estos rumores, en parte porque al final de su periodo en el cargo entre 2008 y 2012, persiguió a los narcotraficantes. Días antes de la declaración de Los Zetas en Radio La Buena, el presidente había desplegado al ejército en la zona con el fin de perseguir al grupo mexicano en Cobán, un municipio que se había convertido, de facto, en la sede del grupo.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) también estaba comenzando a cercar al grupo. En octubre de 2010, la policía en Belice había arrestado y extraditado a un aliado de Los Zetas, un guatemalteco llamado Otoniel Turcios, quien estaba siendo buscado por los gobiernos de Belice y Guatemala. Posteriormente, la administración Colom arrestó y extraditó a otros más.

El mensaje lo manda la persona que entregó el dinero (al presidente).

Sin embargo, aquella mañana Los Zetas presentaron una versión diferente de los hechos. En su comunicado, decían que, en lugar de ir tras los criminales, la administración Colom estaba encubriendo sus crímenes.

“Usted asesinó a ‘Bigote’ (Solórzano) y entregó a Turcios a la DEA porque ellos fueron quienes le dieron el dinero”, leyó el locutor. Solórzano había sido acribillado en una calle de Ciudad de Guatemala en julio de 2010 —impactado por docenas de balas, al mejor estilo criminal—.

La acusación era alarmante, no solo por las desafiantes declaraciones sino por lo que Los Zetas dijeron que se desataría.

“Comenzaremos la guerra en este país, en los centros comerciales, en las escuelas y en las comisarías de policía del país. Con eso se pagarán los 11 millones quinientos mil dólares que el presidente debe”, leía el locutor. “Cumpla sus promesas o se las verá con un monstruo”.

'Yuyo' y Turcios

Solórzano era un político y empresario que había ingresado a la UNE por la puerta trasera. El corpulento hombre de abundantes bigotes había crecido en el sureño departamento de Escuintla, un perenne corredor de drogas y contrabando. Era además empresario, o, como lo describe un exfuncionario de la UNE, un operador: arreglaba contratos del Gobierno en el puerto y otros lugares y obtenía una parte de dichos contratos. Solórzano utilizó estas ganancias para comprar estaciones de gasolina y hoteles.



Obdulio "Yuyo" Solórzano

Las conexiones de Solórzano con intereses potencialmente dudosos generaron suspicacias dentro del partido cuando Sandra Torres, la líder nominal de UNE y esposa de Colom, despejó el camino para que él se postulara al Congreso por el partido en 2003.

Pero la UNE necesitaba gente como Solórzano. El partido tenía una estrategia de afuera para adentro. Las elecciones guatemaltecas habían sido dominadas durante mucho tiempo por quienes controlaban la Ciudad de Guatemala; ningún

presidente había ganado nunca las elecciones sin haber ganado en la capital. La UNE pretendía revertir esa fórmula.

La estrategia surgió a raíz de la experiencia. Colom provenía de una familia pudiente y era propietario de empresas; sin embargo, logró acrecentar su perfil dirigiendo un organismo gubernamental de desarrollo rural posguerra llamado Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) —un programa de reconstrucción y ayuda a las zonas del país devastadas durante décadas de guerra—, donde supo aprovechar bien su cargo, pues le sirvió como base para conformar la UNE.

Pero si bien los votos provenían de los beneficiarios de FONAPAZ y del capital político que generaba, el dinero tenía que venir de otro lugar. Colom no tenía prácticamente ningún apoyo de los grupos financieros tradicionales del país. Cuando lo conocí unos años después del término de su mandato en 2015, dijo que, aunque formaba parte de la asociación empresarial más importante del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), era marginado por sus más prominentes colegas.

“Nunca me invitaban a las reuniones políticas”, me dijo, refiriéndose a las reuniones de alto nivel entre las élites económicas y políticas en las que se resolvían muchos de los asuntos del país.

Colom no se dio treguas en la carrera presidencial como candidato de la antigua coalición de guerrillas izquierdistas de fines de la década de los noventa. Además, se casó con Sandra Torres, una mujer a la que muchos acusaban falsamente de ser miembro de la guerrilla. Aun así, el CACIF percibía que Torres (y Colom) serían perjudiciales para la asociación, por lo que intentaron activamente mantener a la pareja y a su incipiente partido, la UNE, alejados de los más altos niveles de la política.



Sandra Torres con su entonces esposo, el expresidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012)

Las limitaciones financieras de la UNE fueron evidentes durante la derrota electoral de Colom en 2003 frente a Óscar Berger, el candidato preferido del CACIF ese año. Personas como Solórzano eran una manera de salvar esa brecha financiera. Eran, en esencia, los interlocutores que manejarían las conexiones con los intereses financieros, sin importar su origen.

Hacia 2003, las redes de Solórzano se habían fortalecido. Contaba con un importante padrino en el puerto y también consiguió el apoyo electoral de quien luego sería alcalde de Escuintla. Ese año Solórzano obtuvo suficientes votos para convertirse en congresista por Escuintla además, su aliado ganó las elecciones para la alcaldía. Entre ambos conformaron la típica estructura guatemalteca que involucraba contratos gubernamentales, sobornos y lavado de dinero, según le dijo a InSight Crime un exfuncionario de la UNE que trabajó estrechamente con ellos.

Solórzano mantuvo un perfil bajo en el Congreso (el mismo exfuncionario de la UNE dice que era “muy callado”), pero su fortuna económica llamó la atención de los líderes del partido. En ese momento, la UNE recibía cuotas financieras de sus congresistas y alcaldes. Las considerables contribuciones de Solórzano le ayudaron a ascender constante y rápidamente en la política. Para las elecciones de 2007, el partido designó a Solórzano como uno de sus principales operadores financieros y políticos.

Entre los departamentos bajo su jurisdicción se encontraba Alta Verapaz, donde se contactó con un empresario llamado Otoniel Turcios. Este tenía grandes negocios agrícolas y de construcción, pero también había estado conectado con el narcotráfico a comienzos de los noventa. Turcios trabajaba con otro habitante de la zona, Jorge Mario “El Gordo” Paredes, quien también traficaba con drogas, y hacia 2007 ambos estaban siendo investigados por la DEA.

Mediante Solórzano, Turcios vio la oportunidad de mantener a raya a los agentes de la ley, y consiguió algunos negocios con el gobierno. La relación entre ambos evolucionó rápidamente, y Turcios ayudó a Solórzano a establecer contactos con figuras del hampa.

Luego compraron algunas propiedades juntos, según contó un exfuncionario de la UNE que alguna vez viajó con Solórzano para reunirse con Turcios en una de esas propiedades. Este mismo funcionario, que al igual que otros habló bajo condición de anonimato debido a preocupaciones legales, dijo que la conexión con Turcios llevó a Solórzano a “otro nivel”. (Dos miembros de la familia Solórzano que siguen vivos se negaron a comentar sobre los sucesos.)

Más adelante, Turcios cumplió su parte del acuerdo proporcionando dinero para la campaña, al igual que otros tipos de ayuda, como servicios de transporte y gasolina. Ambos se hicieron muy cercanos. Cuando Solórzano iba a trabajar en Alta Verapaz, se quedaba en la casa de Turcios en Cobán. Y poco después Turcios comenzó a llamarlo “Yuyo”, el apodo de siempre de Solórzano.

Ganar en el campo para ganar el país

Para desmentir el paradigma político tradicional, ganando las elecciones generales sin tener que ganar en Ciudad de Guatemala, la campaña tuvo que enfocarse en el campo. Ello implicaba que había que pagarle a un gran número de líderes comunitarios y políticos para que reunieran a los votantes, y a estos había que proporcionarles transporte y otro tipo de logística, para que en efecto pudieran votar.

En la segunda ronda electoral de 2007, una vez más la UNE debió enfrentarse a un poderoso contrincante —el general retirado del ejército Otto Pérez Molina y su Partido Patriota—. Pérez Molina había aprovechado sus propios contactos para robustecer sus arcas, incluso con destacados miembros del CACIF, un proceso que aceleraría su exitosa carrera presidencial.

Según varias fuentes que trabajaron en la campaña, así como un [informe](#) elaborado por investigadores judiciales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la respuesta de la UNE a estos problemas consistió en recurrir a fuentes ilícitas.

Según el informe, la campaña fue esencialmente dividida en tres grandes flujos de ingresos. En la parte superior, operando de manera más oficial y con vínculos con las fuentes más tradicionales de financiación, incluso de la industria farmacéutica y las empresas de construcción, estaba Gustavo Alejos, un poderoso miembro de la élite política y económica, quien administraba la compañía farmacéutica, J.I. Cohen. Alejos también haría contribuciones significativas a la campaña, y más tarde se convertiría en jefe de personal, de modo que pudo empezar a canalizar negocios para sus empresas y las de sus aliados, según señala la CICIG.

La hermana de Sandra Torres, Gloria Torres, era la segunda gran “recaudadora”, como la CICIG los llamaba, y entre sus contactos se encontraban fuentes de financiación abiertamente ilícitas. Según múltiples fuentes locales e internacionales y de la DEA, Gloria Torres forjó relaciones con traficantes como Juan Alberto Ortíz López, alias «[Juan Chamalé](#)», un poderoso transportista de drogas que operaba en el departamento de San Marcos, en la frontera con México, y [Waldemar Lorenzana](#), patriarca de una familia de traficantes que operaba en la frontera oriental con Honduras y El Salvador.

«En el entramado de corrupción construido en torno a Gloria Torres puede observarse, en primer lugar, el vínculo —probablemente mediado por el financiamiento— entre una estructura dedicada al narcotráfico con el nivel más alto de un partido político”, se lee en el informe de la CICIG.

Tanto Chamalé como Lorenzana trabajaban estrechamente con los rivales de Los Zetas, el Cartel de Sinaloa, el cual, según una fuente que ayudó a financiar la campaña de la UNE, también envió a un emisario de Honduras para contribuir a la campaña de la UNE. La fuente dice que ese emisario pertenecía a la familia Gastélum Serrano, los principales representantes del Cartel de Sinaloa en Centroamérica.

Según una fuente de la DEA que le siguió el rastro a la familia durante años, César Gastélum Serrano, el líder nominal del grupo, operó desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula durante al menos una década, y luego fue [capturado](#) en México en abril de 2015. Pero, según la fuente que trabajó en la campaña, supuestamente era otro miembro de la familia el que ejercía como intermediario en el acuerdo con la UNE.

Según el informe de la CICIG, Solórzano era el tercer gran «recaudador». El informe señala que, en la zona de Solórzano en Alta Verapaz, el dinero supuestamente procedía de Turcios. El informe no menciona a Los Zetas, pero, según su propio comunicado a través de Radio La

La respuesta de la UNE consistió en recurrir a fuentes ilícitas.

Buena en Cobán, el grupo criminal canalizó este dinero a través de Solórzano. Los Zetas afirman que, en total, transfirieron a la UNE un poco más de 200 millones de quetzales (un poco más de US\$11 millones en ese momento).

InSight Crime contactó a numerosos funcionarios y exfuncionarios de la UNE para tratar de corroborar la versión de Los Zetas. Dos exintegrantes de la UNE, así como uno que trabajó con Solórzano en actividades de recaudación de fondos para el partido, pero que prefirió hablar bajo condición de anonimato por razones legales y de seguridad, dicen que el partido recibió el dinero, aunque ninguno afirma haber visto cuándo se efectuó la entrega. Dos exinvestigadores del gobierno, así como un agente antinarcóticos extranjero, también dicen que consideran que eso fue lo que sucedió, pero ninguno afirma haber escuchado una versión de primera mano de la entrega.

Aunque la CICIG no los menciona en su informe, hubo otros conductos importantes para la financiación ilícita. Según investigadores guatemaltecos y la fuente que trabajó en la campaña uno de ellos es un exfuncionario del ejército llamado Carlos Quintanilla, quien canalizó dineros del Gordo Paredes y Juan José «[Juancho](#)» León Ardón, quien por entonces era el principal narcotraficante del país. Y Manuel Baldizón, un congresista de la UNE que más tarde se retiraría para formar su propio partido, también supuestamente recibió [fondos de dudosa procedencia](#).

Los investigadores de varias unidades del Ministerio Público que se encuentran adelantando pesquisas en torno a otros casos de financiación ilícita de campaña le dijeron a InSight Crime que hasta el momento no hay ninguna investigación sobre la campaña presidencial de la UNE en 2007. Esto se debe, en parte, al hecho de que no existió ninguna ley específica contra el financiamiento ilícito de campañas [hasta el año 2010](#).

(La falta de investigaciones sobre la UNE ha irritado a los rivales políticos y a otras personas que consideran que ello es una conspiración para evitar ir tras los políticos de izquierda. En múltiples entrevistas, representantes tanto del Ministerio Público como de la CICIG negaron que tuvieran alguna agenda política con respecto a la selección de sus casos.)

Pero las múltiples fuentes contactadas para esta investigación, incluyendo la que proporcionó una parte del dinero y ayudó a recolectar fondos de otros actores ilícitos, dicen que los dólares estadounidenses llegaron a la campaña en cajas de estas diversas fuentes y luego se transfirieron a Ciudad de Guatemala, donde fueron cambiados por quetzales en casas de cambio del centro de la ciudad, para luego ingresar a las arcas de la UNE.

La fuente que participó en el esquema dijo que ellos tenían claro cuál era su parte en el acuerdo: primero, dirigir los contratos del Gobierno hacia las empresas de los traficantes y, en segundo lugar, mantener a la policía, el ejército, la DEA y a los

fiscales alejados del negocio de las drogas. Según la fuente, desde la perspectiva de los narcotraficantes, al aceptar el dinero la UNE aceptó estos términos.



Financiamiento electoral ilícito: El quid pro quo entre narcotraficantes y políticos

El 4 de noviembre de 2007, [Colom venció a Pérez Molina](#) por cuatro puntos, y así se convirtió en el primer presidente en ganar las elecciones generales sin ganar en Ciudad de Guatemala. Además, la UNE obtuvo más escaños en el Congreso que cualquier otro partido y formó una coalición que le permitió asumir el control sobre la legislatura. El poder del partido había llegado a su apogeo.

Visita de Los Zetas al palacio presidencial

Tras la victoria de Colom, sus financistas fueron al palacio presidencial para cobrar sus inversiones. Algunos obtuvieron ganancias significativas.

Las empresas de Turcios, por ejemplo, ayudaron a reconstruir o construir docenas de escuelas y otras infraestructuras gubernamentales, como autopistas y carreteras. Como señala la CICIG, la hija de Turcios también fue colocada en un puesto en PRODEVER, el programa de desarrollo del gobierno de Alta Verapaz. Otros traficantes también obtuvieron contratos del Gobierno. Según la CICIG, uno de ellos fue Juan Chamalé, quien supuestamente representa un caso típico de los acuerdos por las contribuciones de campaña.

Durante los primeros dos años y medio, hubo pocos indicios de que el Gobierno estuviera atacando al narcotráfico. Por ejemplo, durante este período no hubo sino un arresto importante de un operador de Los Zetas, y dos personas que participaron en las operaciones antinarcóticas que condujeron a dicho arresto le dijeron a InSight Crime que ello se debió a intervenciones de llamadas y mensajes de texto realizadas por la DEA, y no a causa de una política proactiva del Gobierno para enfrentar al narcotráfico.

Sin embargo, no todo el mundo pensaba que Colom estuviera en deuda con los narcotraficantes.

«Él subestimó completamente la magnitud del problema», le dijo a InSight Crime un exfuncionario de seguridad de la UNE, refiriéndose al entendimiento del presidente Colom sobre el poder de los narcotraficantes.

Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, coincide con esta afirmación. McFarland llegó a Guatemala en agosto de 2008 y permaneció allí durante toda la administración Colom. Dice que mantuvo una buena relación con el entonces presidente.

«Recibíamos cooperación cuando la pedíamos», dice McFarland. «Y parte de esa cooperación requería la aprobación de Colom».

Pero el aparente desinterés de Colom preocupó a los funcionarios al comienzo de su administración. El líder de Los Zetas que fue arrestado se llamaba Daniel Pérez Rojas, alias “Cachetes” (ver foto abajo). El arresto, que ocurrió el 8 de abril de 2008, alarmó a los agentes, pues Cachetes era supuestamente uno de los fundadores de Los Zetas. Su presencia significaba que la plaza de Guatemala estaba cobrando importancia y que el grupo estaba operando en la capital.



Daniel Pérez Rojas, alias “Cachetes” en el momento de su captura

Sin duda, Los Zetas estaban en el proceso de separarse del grupo del que se originaron, el Cartel del Golfo; establecer una plaza en Guatemala se había convertido en una de sus prioridades, y Cobán había pasado a ser su sede principal. La organización

criminal mexicana se había apoderado de empresas, aterrorizado y extorsionado a agricultores, secuestrado a prominentes ciudadanos y arrinconado literal y realmente a las autoridades: en una ocasión, Los Zetas atacaron a seis policías, los golpearon y los abandonaron atados y desnudos al lado de una carretera.

Dos semanas antes de la captura de Cachetes, el 25 de marzo de 2008, Los Zetas habían convocado a una reunión con Juancho León para hablar de la propensión de este a robar su mercancía y matar a sus operadores. León aceptó la reunión, pero Los Zetas lo emboscaron y lo asesinaron. Además, otras ocho personas fueron asesinadas en una masacre que encendió al bajo mundo en Guatemala y dio inicio a la serie de acontecimientos que llevaron a la captura de Cachetes, la identificación de numerosos refugios de Los Zetas, y el sorprendente descubrimiento de un diario que narraba un importante nombramiento en los altos niveles del Gobierno.

La pista que los condujo inicialmente a ese diario surgió tras el arresto de varios operadores de Los Zetas. Los investigadores les confiscaron identificaciones falsas, lo que los condujo al municipio donde estos habían obtenido los documentos falsos. Allí, los investigadores descubrieron que el administrador local había puesto fotos recientes de unos veinte operadores de Los Zetas en sus registros de identificación municipal. Cachetes, por ejemplo, se hacía pasar por Juan González Díaz.

MODIFICACIONES	Asiento No. U-22 30,906	OBSERVACIONES
	En Comapa 27 de febrero del 2008	L 34 F.183 P 363
	Ante el infrascrito Alcalde y Secretario que firman al calce, comparece personalmente a inscribirse como vecino y quedó inscrito	
	David Estrada Corado	
	El mismo	
	Nombre usual	
	<small>Los apellidos paterno y materno si fuere legítima, legítimamente reconocida, y sólo materna, si fuere natural no reconocida. En el orden que las autor el interesado.</small>	
	Hijo de Isabel Estrada Perez	
	y de María Escilia Corado	
	Lugar de nacimiento Aldea el Obraje, Moyuta	
	Fecha 15 de Julio de 1976	
	Estado Civil Soltero	
	Nombre de la esposa (o)	
	Profesión, arte u oficio estudiante	
	¿Sabe leer? Si ¿Sabe escribir? Si	
	Residencia Aldea San cristobal	
	¿Ha presentado servicio militar?	
	Grado que tiene	
	Lunares, cicatrices visibles	
	Impedimento	
	Defecto físico	
	Color de la tez Moreno claro Color de los ojos cafés	
	Color del cabello Negro ¿Es lacio? Si ¿Es crespo? no	
	Estatura 1 metros 78 centímetros	
	Firma del vecino David Estrada Corado	
	Testigo si ignora firmar el vecino Testigo si ignora firmar el vecino	
	Firma del Alcalde Interino	
	ALCALDE INTERINO Municipalidad Comapa, Jutiapa	
	Firma del Secretario	
	SECRETARIO Municipalidad Comapa, Jutiapa	

Documentos de identificación falsos de Miguel Ángel Treviño, alias "Z40"

Otra de las personas que aparecía en los registros era Miguel Ángel Treviño, alias “Z40”, el segundo al mando del grupo. Treviño tenía una identificación que decía que su nombre era David Estrada Corado (ver foto abajo). Las autoridades descubrieron más adelante que Z40 estaba ingresando al país para recibir tratamiento en una clínica de pérdida de peso en la ciudad. Este proceso se extendió lo suficiente como para que Z40 alquilara un apartamento al frente de la clínica durante varios meses.

Los documentos de identificación condujeron a las autoridades a sus números telefónicos, y los comenzaron a interceptar. Esto a su vez condujo a la captura de Cachetes y a los refugios, los cuales fueron allanados. Dentro de una de las casas utilizadas como refugio, los investigadores encontraron 17 trajes comprados en la fábrica local Men’s Factory, que los hombres llevaban puestos en las fotos usadas para sus identificaciones falsas.

Allí también encontraron el diario. Los Zetas, que llevaban sus archivos meticulosamente, consignaban con quién se reunían y en dónde. En una de sus anotaciones se lee que, poco después de la posesión de Colom como presidente, los representantes de Los Zetas supuestamente se habían reunido con un asesor presidencial en el palacio de gobierno, durante los primeros meses de la administración Colom.

Los dos investigadores que trabajaron en el caso no le pudieron confirmar a InSight Crime quién se reunió con la delegación de Los Zetas en el palacio de gobierno ese día, pero estaban seguros de que dicho encuentro no ocurrió sin el conocimiento del intermediario de Los Zetas, Obdulio Solórzano.

Ambición mortal

Solórzano cargaba la ambición en sus bolsillos. Tras la victoria de Colom, fue nombrado director de FONAPAZ, la misma institución que el presidente había utilizado como plataforma de lanzamiento de su campaña. Solórzano engrosó inmediatamente su propio capital político, supuestamente usando el capital financiero de la fundación.

Solórzano viajó por todo el país, haciendo negocios con dineros del gobierno. Festejaba con sus supuestos aliados, entre quienes se encontraba Gloria Torres, a quien [supuestamente llevó a una de sus propiedades](#) y la invitó a un desayuno especial que hizo llevar en helicóptero. Además, supuestamente estableció esquemas de soborno para beneficiar a sus aliados políticos y a los financistas de la UNE.

“FONAPAZ fue prácticamente una lavandería (de dinero)”, le dijo un exfuncionario de la UNE a InSight Crime.

El informe de la CICIG, así como un informe del Woodrow Wilson Center for International Scholars, confirman este hallazgo.

Bajo la administración de Solórzano, FONAPAZ malversó al menos 1,4 mil millones de quetzales (US\$175 millones), según señala el informe de Wilson Center, agregando que la fundación fue utilizada por el crimen organizado.

«Un asesor de la administración Colom dijo que Solórzano estaba utilizando a FONAPAZ para lavar dinero del narcotráfico, contratando empresas de construcción que tenían vínculos con el crimen organizado para construir proyectos de infraestructura en los municipios del noreste de Guatemala», dice el informe del Wilson Center.

En su informe, la CICIG dice que algunos de estos contratos de FONAPAZ fueron adjudicados a Turcios. En total, 440 millones de quetzales (US\$55 millones) en contratos de FONAPAZ tuvieron que ser anulados, según consta en el informe del Wilson Center. Un [reportaje de elPeriódico](#) indica que el Ministerio Público estaba revisando 103 contratos.

Bajo la administración de Solórzano, FONAPAZ malversó al menos 1,4 mil millones de quetzales (US\$175 millones)

El uso que Solórzano dio a FONAPAZ para fortalecer su posición política siguió la misma fórmula que Colom había utilizado para ganar la presidencia, algo que no pasó desapercibido para los rivales de Solórzano, en particular para la primera dama, Sandra Torres. Según un [cable](#) de la Embajada de Estados Unidos escrito por el entonces embajador Stephen McFarland en 2009, Torres era una [ambiciosa operadora política](#) y pronto ganaría la dudosa reputación como la persona «más áspera» del palacio presidencial de Colom.

«Creemos que la primera dama es, de lejos, la principal administradora del gobierno (si bien no es la más transparente)», escribe McFarland.

Torres se alió con Gustavo Alejos, quien por entonces era el jefe de personal de Colom. Entre ambos intentaron dirigir la administración ejerciendo control sobre el presidente, conocido por su carácter afable y no particularmente fuerte.

Lo que esto significaba en la práctica era construir un muro virtual en torno al presidente, controlar el acceso a él y desarrollar su lista de prioridades. Cuando no podían controlar dicho acceso, Torres y Alejos sacaban a la persona en cuestión de su camino. Por ejemplo, en septiembre de 2008, la administración Colom [anunció](#) el despido de Carlos Quintanilla, quien se había convertido en el jefe del Servicio Secreto de Guatemala después de las elecciones, por presuntamente haber intervenido los teléfonos de la oficina y de la residencia de Colom.

Quintanilla huyó y fue enjuiciado, pero el caso finalmente no prosperó y un exfiscal le dijo a InSight Crime que la causa había sido falsa, un ardid para alejar a Quintanilla

del presidente. (Más tarde la CICIG vinculó a Quintanilla al narcotráfico, pero nunca fue acusado. En 2017 [fue arrestado](#) por cargos de chantaje, y su caso no ha sido resuelto. No respondió a los intentos de InSight Crime por contactarlo.)

A Solórzano también lo sacaron de la ecuación; por eso, aunque figurara como parte del palacio, no tenía acceso al propio presidente. Aún más, Torres ya estaba planeando su propia campaña para la presidencia. Aunque ella no contaba con FONAPAZ, era la directora de varios importantes programas sociales y económicos, de varios millones de dólares, dirigidos al electorado de las zonas rurales pobres, que conformaban la base de la UNE.

Además, contaba con su hermana, Gloria, quien sirvió como conexión con las estructuras de poder locales que habían ayudado a elegir a Colom. Como alta funcionaria de la UNE, Gloria Torres podría contrarrestar el creciente poder de Solórzano en el partido con sus propios tratos a nivel municipal. El quid pro quo era esencialmente el mismo: apoyo financiero y político a cambio de contratos del Gobierno.

A principios de 2009, los anhelos políticos de Solórzano dentro de la UNE se estaban desmoronando rápidamente. No tenía contacto con Colom, y sus enemigos dentro del partido estaban comenzando a filtrar información sobre las infracciones de FONAPAZ y sus dudosas conexiones con narcotraficantes como Turcios, quien ya estaba oficialmente en el radar del Gobierno y de la DEA.

Escuche nuestro podcast [“El operador político de Guatemala”](#)

[En el mes de junio](#), Solórzano fue expulsado de FONAPAZ, pero sus ambiciones no se desvanecieron. Tenía quien lo respaldara financieramente. Disponía de aliados políticos y contaba con experiencia. Lo que necesitaba entonces era un partido político. Tras su oprobiosa salida de FONAPAZ, comenzó a hacerle propuestas a un partido rival, según dijo una fuente que asistió a por lo menos una reunión con dicho partido. Otra fuente que trabajó con la UNE dijo que Solórzano también estableció contacto con otro partido.

Por su parte, Solórzano nunca abandonó la esperanza de poder reunirse con Colom y convencerlo de acudir con él a otro partido, según le dijeron a InSight Crime dos personas que mantuvieron conversaciones con él en esa época. Para entonces, Colom libraba su propia lucha, cada vez más marginado por la primera dama y Gustavo Alejos, quienes también [se enfrentaban entre sí](#). (Más tarde Alejos fue [acusado de corrupción](#), pero se dio a la fuga. Hace poco, un grupo de congresistas lo puso en [una lista negra de personajes corruptos](#) del Triángulo Norte de Centroamérica. Colom y Torres se divorciaron más adelante, y desde entonces las distancias entre ellos han crecido.)

Solórzano consideraba que el presidente era su amigo y posible aliado, según les dijo a sus socios. Estos le advirtieron que tuviera cautela, pues lo tenían fichado. Pero

Solórzano no prestó atención a sus advertencias.

El 7 de julio de 2010, al auto blindado de Solórzano recibió un golpe por detrás. Fue un accidente leve, pero causó el suficiente daño para que al día siguiente tuviera que llevar el auto al taller y tomara un Range Rover nuevo que no estaba blindado, mientras reparaban su carro.



Esa noche salió de su oficina y llevó a su secretaria a la casa. Luego él y sus guardaespaldas tomaron el Bulevar Liberación. Aunque es una arteria principal de Ciudad de Guatemala cerca del aeropuerto, hay lugares con pocas

cámaras de seguridad. Fue en uno de estos lugares, cuando giró hacia el Obelisco de Guatemala, donde hombres con armas automáticas le tendieron una emboscada y acribillaron su auto, matándolo a él y a uno de sus guardaespaldas.

La defensa de Colom

Cuando me reuní con Colom en 2015, él vivía en un apartamento de planta baja en una elegante zona de Ciudad de Guatemala. El expresidente —quien actualmente enfrenta cargos de corrupción en [un caso](#) adelantado por el Ministerio Público y la CICIG— es alto y enjuto, y sus trajes le quedan anchos.

Yo había ido a hablar con él acerca de otro tema, pero surgieron algunas preguntas acerca del financiamiento ilícito de su campaña de 2007. Debo reconocer que no se puso pálido. Lo volví a tratar de contactar para hablar sobre esta historia en particular, pero él no respondió a una detallada lista de preguntas. Esa negativa dejó un vacío porque en la entrevista previa, Colom me había dado algunas explicaciones extrañas de sus acciones, especialmente con respecto a Solórzano.

En primer lugar, el expresidente negó tener algún conocimiento acerca de contribuciones relacionadas con el comercio de drogas a su campaña.

«Ese dinero nunca llegó», dijo refiriéndose a la supuesta contribución de varios millones de dólares que Los Zetas afirmaron haber hecho, mediante el anuncio en Radio La Buena. «Con 11 millones de dólares yo habría ganado en la primera vuelta», dijo riéndose, evocando las elecciones de 2007.

Por su parte, cuando Nómada le preguntó al respecto en 2015, Sandra Torres [evadió](#) el tema de la financiación de la campaña, pues no se refirió a la veracidad de las acusaciones sobre las contribuciones de fuentes ilícitas. «Yo estuve en lo social, no estuve en esa parte (de la recaudación de fondos)», dijo.

Colom afirma que el rumor que más ha debido rebatir es el de que Juancho León había hecho contribuciones a su campaña. De hecho, dijo que la familia León intentó

matarlo en julio de 2008 porque el expresidente supuestamente había «traicionado» a Juancho León al abrirles la puerta a Los Zetas. Los atacantes, dijo, lo confundieron con su equipo de avanzada.

«Dos de nuestros vehículos principales fueron emboscados», explicó. «Encontraron cheques del hermano de León en los vehículos de los asesinos».

Sin embargo, Colom no logró recordar si alguien murió o resultó herido en el ataque. Tampoco hay ningún registro público de la emboscada, y ninguno de los exfuncionarios de seguridad de ese período a quienes pregunté sobre el tema recuerda el evento.

Cuando le pregunté al expresidente por Solórzano, la conversación tomó un giro un poco más extraño. Colom dijo que Turcios le dio dinero a Solórzano, pero el expresidente insiste en que era para negocios de ambos relacionados con «ganado», no con la financiación de la campaña.

Con 11 millones de dólares yo habría ganado en la primera vuelta.

Agregó que, a principios de su mandato, el Ministerio de Gobernación hizo una presentación sobre los grupos de narcotráfico en el país, y Turcios aparecía entre los primeros.

«Le pedí a Obdulio que rompiera relaciones con Turcios», me dijo. «pero él me respondió: ‘No, señor presidente. Él no es narcotraficante, es una buena persona’».

Cuando insistí en que explicara por qué Solórzano había durado tanto tiempo como director de FONAPAZ, Colom dijo que se había dado cuenta de que él estaba metido en negocios sucios a principios de su administración, cuando, tras un evento presidencial en el estado fronterizo de Chiquimula, Solórzano se fue en un helicóptero para su finca.

“Me quiero ir para mi finca en Alta Verapaz”, cuanta Colom que le dijo.

Colom afirma que lo impresionó la ostentosa manera como Solórzano se retiró, y que lo despidió cuando este regresó de ese viaje. Pero «media hora después», dijo Colom, el entonces embajador de Estados Unidos, McFarland, lo llamó y le pidió que no lo despidiera. Estaba implícito que Solórzano era objeto de una investigación. Colom dice que, meses después, luego de obtener la aprobación de McFarland, despidió a Solórzano.

Sin embargo, el exembajador niega que alguna vez le hubiese pedido a Colom que despidiera a alguien de quien él sospechaba que tenía vínculos con narcotraficantes.

“No era así como manejaba temas relacionados con narcotráfico, corrupción o con Colom”, le dijo McFarland a InSight Crime.

Cuando le pregunté a Colom por qué Solórzano había sido asesinado, dijo que se debió a su relación con Turcios. «Turcios le dio dinero a Solórzano», dijo, «y es por eso que Solórzano fue asesinado».

Al respecto, el expresidente ha hecho comentarios similares, aunque más ambiguos, en conversaciones con otros periodistas. En una entrevista con el Wilson Center, Colom le dijo a Julie López que el asesinato de Solórzano había sido «grave», refiriéndose a la forma en la que fue asesinado.

«Cuando el río suena, piedras lleva», le dijo, utilizando un viejo refrán guatemalteco para aludir a las oscuras conexiones de Solórzano y su posterior distanciamiento de la administración.

Guerra contra los narcos

Pero si bien Colom se preguntaba sobre el asesinato de su leal colega y recaudador de fondos, no ejerció mucha presión para que el Ministerio Público adelantara investigaciones. Quienes trabajaban en el Ministerio Público durante la administración Colom tuvieron dificultades incluso para identificar al excongresista de la UNE o para recordar su sonado asesinato en una zona céntrica de la capital. Y dicen que no hubo ningún tipo de presión de la presidencia para que se investigara.

Aun así, meses después del asesinato de Solórzano, el Gobierno y la DEA incrementaron sus esfuerzos por acorrallar y arrestar a los narcotraficantes, y pusieron sus ojos primero en lugares como Cobán.

Allí, financistas como Turcios ya sabían que la marea se estaba volviendo contra ellos. Y cuando sus fuentes le dijeron a este que se aproximaba un gran contingente, huyó a Petén en helicóptero. Luego pasó a Belice por tierra, donde fue [capturado](#) y enviado a Estados Unidos para que respondiera por cargos de narcotráfico.

El Gobierno decretó el estado de sitio en Alta Verapaz, lo que condujo a las desafiantes declaraciones de Los Zetas sobre el financiamiento de la campaña y sobre la muerte de Solórzano. (Habría declarado otro estado de sitio en el departamento de Petén.)

En los meses siguientes, Los Zetas cumplieron su promesa de generar disturbios. En mayo de 2011, [sembraron el caos](#) durante una semana, cuando mataron al hermano de Juancho León en Petén y masacraron a 28 campesinos. Días más tarde, asesinaron a un fiscal en Cobán y dejaron partes de su cuerpo desmembrado frente a tres oficinas gubernamentales.

Pero la reacción de Colom fue enérgica, dado que el pacto electoral se había roto hacía mucho tiempo.

«Odio al narcotráfico», me dijo.

Para finales de 2011, más de cien presuntos miembros de Los Zetas estaban en la cárcel, y el grupo criminal nunca ha recuperado su poder en Guatemala. Otros narcotraficantes, como Chamalé y Lorenzana, también fueron capturados y extraditados.

«El hecho de que realmente hubieran actuado fue bien recibido por el pueblo», dice McFarland. «Según las normas guatemaltecas, hicieron algunos avances significativos».

La impresionante muestra de poder por parte de Colom, los arrestos y las subsecuentes extradiciones de numerosos narcotraficantes lo han protegido a él y a su partido en el debate sobre las presuntas contribuciones del narcotráfico a su campaña de 2007. Pero todavía quedan algunas preguntas abiertas en torno a lo que pasó con Solórzano, su papel en la financiación de la campaña presidencial y su posterior asesinato.



2. Política en Guatemala y la teoría del eterno retorno del Partido Patriota

Felipe Puerta y Steven Dudley

Juan Carlos Monzón estaba en Corea del Sur junto a su jefa, la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, cuando ella recibió la llamada que cambiaría para siempre el rumbo de sus caminos, que durante los últimos cuatro años había estado íntimamente vinculado.

Al otro lado del teléfono estaba el presidente Otto Pérez Molina, quien tenía información sobre una orden de captura que esperaba a Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta, el día siguiente, a su regreso a Guatemala.

La comitiva que [acompañaba](#) a Baldetti a recibir un doctorado honoris causa en Trabajo Social de la Universidad Católica de Daegu el 16 de abril de 2015 también incluía a su asistente personal y exdiputada del Partido Patriota (PP), Daniela Beltranena de Campbell.

Según Beltranena, la reacción inicial de todos fue de resignación. Años después frente a un estrado, Beltranena diría que encontró a Monzón y a Baldetti llorando en la habitación de la vicepresidenta. [Según Beltranena](#), la respuesta inmediata del equipo fue que deberían volver al país.

Pero la decisión de Juan Carlos Monzón no solo lo afectaría a él. El secretario privado de la vicepresidenta era [señalado](#) por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de liderar una estructura de fraude aduanero que sería conocida como La Línea. Un esquema que implicaría a docenas de funcionarios y que, como luego se sabría, era dirigido desde lo más alto

de la presidencia, por Pérez Molina y Baldetti. Y la vicepresidenta no estaba lista para darse por vencida.

Según Monzón, Baldetti ordenó a Beltranena que realizara los preparativos para su fuga, que incluyó comunicarse con el embajador de Guatemala en Corea del Sur para que le ayudara con el escape.

Luego, la vicepresidenta le entregó a Monzón un celular nuevo con cobertura internacional que, según dijeron investigadores del caso a InSight Crime, le había sido asignado a Baldetti por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), la versión guatemalteca del servicio secreto, a través del cual podrían estar en contacto.

Mientras el secretario privado de la vicepresidenta evaluaba detenidamente sus opciones, al otro lado del mundo, en una exclusiva oficina en Ciudad Guatemala, otra de las figuras más poderosas del PP enfrentaba un dilema similar.

Alejandro Sinibaldi había renunciado el año anterior a la dirección del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del PP y por esos días ya era precandidato a la presidencia de la República por ese mismo partido.



El excandidato presidencial del PP Alejandro Sinibaldi. Foto cortesía de Plaza Pública

Pero Sinibaldi tenía un historial de corrupción por derecho propio, específicamente por aportes electorales ilícitos y esquemas de sobornos, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los investigadores tocaran a su puerta.

El partido financió su llegada al poder a través de una serie de empresas de cartón que funcionaban para recibir dinero ilícito de una amplia gama de financistas, lavarlo y luego inyectarlo a la campaña electoral sin reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según dijeron investigadores del caso en Guatemala a InSight Crime, 95 por ciento del dinero que ingresó a la campaña no fue reportado y fue enviado a cuentas privadas.

El gobierno de Pérez Molina y Baldetti entendía claramente que para hacer política y dinero en Guatemala, los políticos y empresarios corruptos trabajan con lo que ellos mismos llaman “cuotas de poder” o favores, que pueden abrir puertas para acceder a contratos y beneficios del gobierno.

La Línea fue solo el comienzo. Los investigadores posteriormente dejarían al descubierto el modus operandi de la administración y de sus aliados, y mostrarían cómo el gobierno del PP, tal vez más que cualquiera antes que ellos, había encontrado en su paso por el poder múltiples formas de enriquecerse.

La llegada del PP a la presidencia fue un ejemplo perfecto del funcionamiento del “pay-for-play” en la política guatemalteca, donde las empresas financian elecciones para recibir beneficios o contratos del Gobierno.

Y para eso se necesita operadores como Monzón y Sinibaldi, quienes, al darse cuenta de que el intrincado esquema del que hacían parte se desmoronaba, enfrentaron una decisión: huir o entregarse a la justicia.

Campañas y empresas

Los investigadores dicen que Juan Carlos Monzón nunca se imaginó que se convertiría en el secretario privado de la vicepresidenta. Que lo designaran en la cabeza del Ministerio de Cultura y Deportes seguramente le habría parecido una apuesta más segura al empresario de la industria deportiva con formación militar, cuando comenzó a tener acercamientos con el PP, antes de las elecciones de 2011.

Canchas Deportivas de Guatemala S.A, ya había prestado servicios de instalación de espacios y comercialización de elementos deportivos durante varios años. De hecho, la empresa de Monzón ya había sido contratista del Estado entre 2006 y 2011, de cuando existen registros de [contratos estatales](#) cercanos a los US\$2,5 millones

Escuche nuestro podcast [“El Robacarros”](#)

Los investigadores coinciden en que su contacto inicial con el PP se dio a través de los diputados Aleksander Castillo y Edgar Cristiani, a quienes conocía por la pasión que compartían por la velocidad y las carreras de motos. Tras su paso por el gobierno, Monzón [llegó a tener](#) al menos 10 motocicletas, incluyendo al menos tres de lujo valoradas en más de US\$80.000.

Tal vez haya sido ese gusto por la adrenalina el que lo llevó a cometer algunos de sus primeros delitos. Fiscales dijeron a InSight Crime que durante su juventud en el ejército en los noventa, el futuro secretario privado de Roxana Baldetti era apodado “[Robacarros Monzón](#)”.

En 2001 fue capturado junto con otros miembros de una presunta banda dedicada al robo de automóviles, luego de que un intento de robo en el que participó en Ciudad de Guatemala terminara en un intercambio de balas con la policía. Monzón fue dejado en libertad y los cargos fueron retirados.

Diez años después, Monzón comenzó a trabajar con el PP organizando eventos para atraer votos. Pronto, su diligencia le ganó el afecto de Baldetti, quien le confió el manejo de la campaña en dos de los distritos electorales más importantes del país: Ciudad de Guatemala y Petén. Luego, a raíz de su éxito en la tarea, fue nombrado secretario de campaña.

Fue por esos días que Baldetti y Monzón comenzaron a pactar sus primeras “cuotas”. Uno de sus primeros socios fue Miguel Ángel Martínez, representante legal del Grupo Escorpión, una empresa de seguridad privada que estaba prestando sus servicios para la campaña. Durante el gobierno vendrían más contratos, y se forjaría una relación que resultaría mutuamente beneficiosa.

Monzón, por su parte, comenzó a tocar puertas, apretar manos y recolectar dinero. Y, bajo las órdenes de Baldetti, también empezó a implementar la estructura que permitió al partido lavar el dinero que pedían a los financistas.

Esta estrategia incluyó la creación de empresas de cartón que servían para canalizar el dinero de aportantes que querían mantenerse en el anonimato. Así fue como Monzón y Víctor Hugo Hernández, el principal testaferro de la estructura, comenzaron a alquilar apartamentos, oficinas y bodegas para almacenar el dinero y establecieron un mecanismo para ingresar cheques al sistema financiero sin levantar sospechas.

Los empresarios y otros financistas que querían asegurarse los afectos y el buen trato del partido una vez llegaran a la presidencia aportaban a la campaña, además de dinero, bienes y servicios, como viajes, planes de celular ilimitados y vehículos de alta gama.

Monzón, por su parte, comenzó a tocar puertas, apretar manos y recolectar dinero.

Parte de los pagos se hacía con dinero en efectivo, cheques y transferencias bancarias. En ambos casos, la estructura ofrecía a los “donantes” la opción de facturación falsa por el concepto de servicios que nunca serían prestados.

El dinero en efectivo era movido en maletines y era almacenado en la casa de campaña y en las propiedades alquiladas por Monzón y Hernández. Las empresas de cartón creadas a sus nombres también jugaron un papel fundamental en el esquema de financiamiento ilícito.

“En los reportes consignados al TSE se ve mes a mes como las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades”, señalaría después la CICIG en su informe sobre el caso [Cooptación del Estado](#).

Las contribuciones para la campaña venían de varias fuentes. Algunas de las empresas vinculadas al financiamiento del partido fueron los canales de televisión Radiotelevisión Guatemala S.A. y Televisiete S.A., propiedad de la misma persona, que según la CICIG y el MP, dieron contribuciones a la campaña a través de por lo menos cuatro empresas vinculadas a Baldetti en pagos mensuales que sumaron cerca de US\$2,5 millones.

No todo el dinero era gastado en la campaña electoral. Según el testimonio de Monzón, una parte del dinero era guardado en la casa de campaña en “el despacho de la señora vicepresidenta en el área del baño”. El dinero también era escondido en varias oficinas, escritorios, archivadores y cajas fuertes.

Una foto vale más que mil abogados

En 2011, la operación del gigante de las telecomunicaciones Claro en Guatemala tenía un problema legal que amenazaba con dejarla en bancarrota. La Superintendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda habían “resuelto” a favor de Tigo un conflicto que la empresa tenía con Claro desde 1998 y determinaron que la segunda tenía que pagar US\$400 millones a su rival por supuestamente haber violado la ley de contratación de telefonía.

Según los investigadores, Claro había buscado acercarse a la presidencia de Álvaro Colom para resolver la disputa, pero había tenido poco éxito. Para empeorar las cosas, el rival de Claro ya estaba posicionado con el PP, que ya en ese momento parecía que iba a ganar la presidencia. En otras palabras, la empresa necesitaba tomar medidas para salvar su negocio.

Con este fin, Julio Porras Zadik, el gerente de la empresa para Centroamérica, se dio a la tarea de contratar los servicios de José Julio Ligorria, uno de los principales operadores del PP, quien en ese momento ya se había posicionado también para desempeñarse como embajador del país en Estados Unidos cuando el PP resultara electo.

Ligorria, también conocido como “El Gordo”, es un experimentado consultor guatemalteco de relaciones públicas, quien además tenía fuertes relaciones con el ejército, lo cual también le ayudó a acercarse a los círculos políticos del PP.

Su socio de muchos años fue el teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla. Para ese momento López Bonilla ya se había hecho una figura clave en la campaña del PP y estaba por convertirse en ministro de Gobernación, desde donde dirigiría su [propio esquema](#) de corrupción.

Sin embargo, ambos sabían que se quedaban cortos a la hora de hacer negocios con Claro y que necesitaban de un tercero, y ¿quién mejor que el futuro ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda?

A decir de muchos, Alejandro Sinibaldi era un arribista. El entonces congresista había crecido cómodamente, pero lejos de los lujos y excesos de la poderosa élite del país con la que ahora se codeaba. Su escalada social comenzó cuando se casó con María José Saravia, la hija de un reconocido abogado y empresario guatemalteco miembro de la élite tradicional, cuya familia es propietaria de Cervecería Centroamericana, una de las más grandes del país y la región.

Investigadores del caso dijeron a InSight Crime que Sinibaldi nunca encajó muy bien en la familia de su esposa, por lo que buscó hacerse su propio nombre en la arena política.

Haciendo uso de sus conexiones, Sinibaldi fue designado ministro de Turismo en 2004, una plataforma que supo aprovechar para llegar al Congreso por el PP en 2008.

Para 2011, Sinibaldi ya estaba haciendo negocios con algunos de los hombres más ricos e importantes del país, y no dejaba pasar un solo momento para mostrar el capital social, político y económico que estaba amasando.



Otto Pérez, Carlos Slim y Roxana Baldetti durante su reunión en agosto de 2011

Según declaró Porras Zadik años después: Ese fue el caso de Claro. Sinibaldi dijo a Ligorria que para que el PP mediara en el caso, Claro debía brindar un apoyo financiero a la campaña, con un monto igual o mayor al que ya había proporcionado su rival Tigo a la campaña.

Para canalizar los fondos, el donante contrataría a varias de las empresas de Sinibaldi, incluyendo a Impresos Urbanos e Imágenes Urbanas. Las empresas crearían facturas por concepto de impresión de vallas, material gráfico y estrategias de comunicación. Los servicios nunca fueron prestados.

Así fue como, luego de realizar pagos por más de US\$2 millones a las empresas de Sinibaldi, el futuro ministro, planeó una reunión en México en agosto de 2011 entre los candidatos Pérez Molina y Baldetti, con Carlos Slim, accionista mayoritario de la empresa propietaria de Claro.

Los asistentes a la reunión se tomaron una foto que fue publicada en varios medios guatemaltecos. La estrategia del PP, según contó el comisionado de la CIGIG Iván Velásquez meses después, era “asustar” a Tigo.

Un mes más tarde de la infame reunión organizada por Sinibaldi, Claro y Tigo llegaron a acuerdos.

El PP coopta al Estado

Tan pronto llegaron al poder Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti pusieron a rodar el esquema de corrupción que habían establecido durante las elecciones.

Para su acto de posesión, el gobierno contrató por aproximadamente US\$4.000 a la empresa HJ&AV, de Víctor Hernández –el testaferro que había trabajado con Monzón lavando dinero durante la campaña– para prestar servicios de decoración para la recepción del evento. A Hernández también le fue asignado un salario estatal a través de una plaza fantasma creada por el PP en el Registro de Información Catastral (RIC).

Tras su llegada al poder, el PP comenzó a firmar contratos con empresas a cambio de coimas, a interferir de manera favorable para sus donantes en casos judiciales y a ubicar a sus aliados en posiciones clave para seguir enriqueciendo a su estructura.

Monzón estaba en el centro de muchos de los esquemas. Los investigadores calculan que sólo él llegó a mover al menos US\$21 millones en sobornos y que la estructura criminal del PP recibió al menos US\$67 millones a través de más de 450 contratos estatales.

Como parte de su trabajo como secretario privado de la vicepresidencia, Monzón recolectaba para Baldetti pagos mensuales de US\$20.000 por los contratos de seguridad estatales que fueron otorgados al menos a tres empresas relacionadas con Martínez, uno de los fundadores de Escorpión, quien además fue nombrado subsecretario de la SAAS, la institución que entregó a Baldetti el celular usado por Monzón durante su escape.

En total, al Grupo Escorpión le fueron otorgados más de US\$8 millones en contratos durante los primeros años de gobierno. Pero en Guatemala los contratos tienen un costo y se estima que la empresa llegó a gastar más de US\$700.000 en sobornos a cambio de los contratos. Parte de ese dinero era facturado simulando la contratación de guardias de seguridad, que en realidad nunca prestaron sus servicios.



Financiamiento electoral ilícito: El quid pro quo entre empresarios y políticos

Monzón también hizo sus propios negocios. Tras la llegada del PP al gobierno su empresa deportiva pasó a nombre de su esposa, y entre 2012 y 2015, [recibió](#) al menos 13 contratos estatales.

El secretario privado también implementó una serie de proyectos de fertilizantes con los que benefició a las empresas Tigma y Mayafert [con multimillonarios contratos](#). A cambio, las empresas pagaron más de US\$660.000 en comisiones a la estructura a lo largo de los años de gobierno.

Según los investigadores, por lo general Pérez Molina y Baldetti se quedaban con 60 por ciento de la comisión y el resto era repartido entre los demás participantes de cada esquema. Una de las estrategias predilectas de la estructura durante la campaña y tras su llegada al poder fue la alteración de documentos y la falsificación de facturas.

Eso quedó demostrado con el caso La Línea, en el cual la maniobra servía tanto para ahorrar impuestos a las empresas que ingresaban mercancía por Puerto Quetzal a cambio de sobornos al PP y sus operadores.

Aunque inicialmente el MP y la CICIG señalaron a Monzón de dirigir la estructura, el juez del caso posteriormente disminuyó su papel al de un “[líder operativo](#)”, que había sido designado por Baldetti para coordinar y supervisar la estructura de corrupción que funcionaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En la práctica, esto significaba que el secretario privado de la vicepresidenta se mantenía en contacto directo con un funcionario de alto nivel en la SAT. Él también se aseguraba de que las declaraciones de impuestos se vieran acordes con los documentos presentados en el puerto, que los funcionarios de nivel medio estuvieran cumpliendo con los requerimientos legales y que todos los participantes del esquema estuvieran recibiendo su dinero.

En 2011, poco después de que Pérez Molina ganara las elecciones, Monzón también empezó a recolectar dinero para lo que se convertiría en una tradición que fue denominada La Cooperacha.

Cada año, en la víspera del cumpleaños del presidente, los empresarios, políticos y funcionarios que se estaban beneficiando de la corrupta administración recibían una visita o una llamada de Monzón, para pedirles dinero para comprar un regalo para el presidente.

Monzón después contaría que el primer regalo que recibió Pérez Molina fue una moto Harley Davidson de US\$25.000. Según el secretario privado, la idea surgió luego de que el “[jefe](#)” viera una similar en un viaje oficial que hizo a Cancún con varios funcionarios, incluyendo diputados.

El regalo de cada año debía superar al del anterior. Monzón también recogió fondos para dar al presidente una casa de US\$1 millón en la playa, un helicóptero valorado en más de US\$3,5 millones y dos lanchas.

Investigadores dijeron a InSight Crime que el presidente supo que quería una lancha para su nueva casa en la playa cuando vio a Alejandro Sinibaldi lucir la suya y se antojó de una igual. Para su sorpresa, poco después del recibir el regalo, Pérez Molina se enteró de que esa no era la única lancha de su ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y que en realidad su nueva lancha era la más modesta en la flota de él.

El botín del ministerio

Según [recuerda](#) en sus declaraciones frente a una jueza el empresario de la construcción José Luis Agüero, de Asfaltos de Guatemala, a finales de enero de 2012, apenas días después de que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti asumieran la presidencia, fue citado a la oficina del nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Alejandro Sinibaldi, según las personas cercanas a él, era un hombre arrogante. El nuevo ministro, que se presentaba normalmente con más de una hora de retraso, sacó de su archivador una carpeta donde se resumía lo que en Guatemala se conoce como “deuda de arrastre”, o el dinero que el Estado debe a las empresas por contratos con gobiernos anteriores, que en su caso sumaba cerca de US\$7 millones.

Sinibaldi subió los pies sobre la mesa y le dijo que la única forma de recuperar ese dinero era a través de un “reconocimiento”, de 15 por ciento de la deuda.

“Lógicamente me quedé asustado, me quedé angustiado, me tomó por sorpresa y me puso contra la pared totalmente”, dijo Agüero.

La estrategia era la misma que Sinibaldi solía usar con los demás constructores y empresarios. Sin embargo, el precio no era el mismo para todos. Según dijeron investigadores a InSight Crime, en algunos casos Sinibaldi llegaba a cobrar hasta el 35 por ciento del total de la deuda.

Según ellos, como el gobierno no tenía el suficiente dinero para pagar la deuda de los constructores y otros contratistas, parte del plan de Sinibaldi incluía aprobar la emisión de bonos de deuda de país y utilizar ese dinero para los pagos a los empresarios.

El ministro también vendía contratos de obras públicas. Los investigadores dicen que Sinibaldi cobraba entre 5 y 10 por ciento del valor del contrato.

Un caso que destacan es el de Otto y José Samayoa. Dos hermanos a quienes se refieren como “Los Brodercitos”, quienes habían hecho buena parte de su dinero con la construcción de obras públicas en los noventa y se habían convertido en unos de los empresarios de la construcción más prósperos del país.

José era un viejo conocido del PP que se había desempeñado como diputado del partido. Para la campaña presidencial, los hermanos habrían US\$3,6 millones al partido. Como en el caso de Claro, esos aportes fueron movidos a través de las empresas de Sinibaldi.

El ministro también vendía contratos de obras públicas.

Durante la administración PP, al menos tres empresas de los hermanos adquirieron servicios de las empresas de Sinibaldi por unos US\$8 millones, que incluían servicios como el alquiler de camiones y retroexcavadoras por el supuesto movimiento y transporte de materiales.

Aunque no se prestó ningún servicio, la tasa de retorno fue substancial. Entre 2012 y 2014, a gran parte de las más de 60 empresas vinculadas con los hermanos les fueron [adjudicados](#) contratos por millones de dólares, la mayoría a través del ministerio que dirigía Sinibaldi.

Algunas de las empresas de los hermanos incluso competían por contratos estatales entre ellas, para dar una apariencia de legalidad a la adjudicación de proyectos a dedo.

La estructura dirigida por Sinibaldi y denominada [Construcción y Corrupción](#) por la CICIG y el MP es señalada de recibir al menos US\$13 millones en sobornos de Los Brodercitos, Agüero y otros, incluyendo a la infame empresa de construcción brasileña Odebrecht.

Para canalizar ese dinero, el ministro, con la ayuda de un viejo amigo y socio en varias empresas, Christian Ross, creó al menos 20 empresas de cartón. Ross quien también fue diputado del PP, había recibido al menos US\$67.000 provenientes del financiamiento electoral ilícito por parte de Claro en 2011.

El Ministerio de Telecomunicaciones y Obras Públicas era uno de los que más recursos manejaba y Sinibaldi era uno de los miembros de la estructura PP que

más dinero estaba haciendo. Según los investigadores, era parte de un plan. La pareja presidencial estaba dejando que se enriqueciera porque era probable que se convirtiera en el próximo presidente del país y querían contarle entre sus aliados para poder protegerse de cualquier acción en su contra y continuar enriqueciéndose.

El fin del eterno retorno

Tras su regreso de Corea del Sur el 17 de abril de 2015, Baldetti aseguró en una emotiva pero breve [conferencia de prensa](#) que no tenía información sobre el paradero de su secretario privado, Juan Carlos Monzón. Al parecer, Monzón había seguido el consejo de su jefa y se había dado a la fuga.

Si bien Baldetti inicialmente se desprendió del caso, poco después, y a medida que más información se iba haciendo pública, tanto ella como el presidente cambiaron de discurso y culparon a Monzón de estar detrás del esquema de fraude aduanero, según señalaron los investigadores.

“Yo no puedo hacerme responsable de nadie más que de mí. Si yo hubiera querido detener algo o intervenir, lo hubiera hecho, pero dejamos que la investigación siguiera su curso”, [dijo](#) Baldetti agitada.

El plan de Baldetti no salió como lo esperaba y [renunció](#) pocos días después. En agosto de ese año fue capturada por las autoridades. Un mes después Pérez Molina [renunció](#) a su cargo un mes después, luego de que el MP emitiera una orden de captura en su contra.



Juan Carlos Monzón poco después de entregarse a las autoridades

Con sus antiguos jefes tras las rejas, Monzón decidió [entregarse](#) luego de haber pasado casi seis meses en fuga en varios países.

El testimonio de Monzón, en ocasiones detallado, en ocasiones salaz, pero siempre interesante, duró alrededor de dos meses. En él, el exsecretario aseguró que Pérez Molina y Baldetti mantenían una relación amorosa y que la pareja incluso se había ideado un “cuadro de jubilación de US\$2 millones anuales durante 25 años” a través de la estructura de La Línea. El relato del exsecretario parecía más un cuento de hadas moderno con botes, helicópteros y mansiones.

Lo que es más importante, el testimonio, la información y los documentos presentados por Monzón detallaban los esquemas desde adentro, y permitieron a los fiscales e investigadores construir varios casos contra una larga lista de funcionarios corruptos, empresarios y otros.

Miguel Ángel Martínez de Grupo Escorpión y el testaferro Víctor Hernández también fueron colaboradores eficaces y proporcionaron documentación y testimonios sobre la estructura de sobornos y corrupción en el gobierno del PP.

El esquema era memorable. Pérez Molina y Baldetti habían abonado el terreno para el eterno retorno de dinero para el partido, utilizando todos los recursos del Estado para imitar los principios de la concepción filosófica de la repetición de un mundo que se acaba para volver a crearse. En la versión del PP, el patrón se repetiría cuando Sinibaldi llegara a la presidencia, pero su esquema también se estaba comenzando a desmoronar.

El 28 de junio de 2017, el gerente de operaciones de Claro en Centroamérica Julio Porras Zadik, [se convirtió](#) en el primer empresario del país en aceptar haber financiado ilegalmente al PP y presentó su versión de los hechos.

El caso llevó a la [captura](#) del exembajador José Julio Ligorria en Madrid, en julio de 2017. Su socio, Mauricio López Bonilla, [había sido capturado](#) en junio de 2016, acusado de haber participado en La Cooperacha. El exministro también fue [pedido en extradición](#) por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Sinibaldi, por su parte, renunció a la candidatura presidencial del PP días después del regreso de Baldetti de Corea del Sur y se fue públicamente contra el gobierno y contra la vicepresidenta, a quien señaló de sabotear su campaña.

“Los principios del Partido Patriota ya no existen, ahora existen intereses mezquinos. El rumbo equivocado que lleva el país me obliga a tomar esta determinación”, [señaló](#) el exministro durante una rueda de prensa pocos días después del escándalo.

Aunque su nombre no fue vinculado directamente al caso de La Línea, a medida que las investigaciones avanzaban, y empezó a aparecer en otros casos, el exministro y nuevo miembro de una de las familias de mayor alcurnia de Guatemala, simplemente dejó el país.

Alejandro Sinibaldi fue visto por última vez un año después, en una entrevista por Skype supuestamente desde un hotel en la India. En [la entrevista](#) Sinibaldi asegura que estaba dedicado a aprender sobre meditación y cómo llevar una vida tranquila y en paz. También dijo que regularmente se reunía con miembros de otro partido.

Dos meses después de su aparición, Interpol recibió una solicitud de orden internacional de captura contra el exministro por su participación en La Cooperacha. Sinibaldi también era [señalado](#) de lavado de dinero y asociación ilícita tras su paso por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Posteriormente fue vinculado a otro caso conocido como [Construcción y Corrupción](#). Actualmente sigue prófugo.

El caso Construcción y Corrupción [continuó](#). El 14 de Agosto de 2018, el Ministerio Público y la CICIG anunciaron la “fase 2” de los cargos, explicando cómo Sinibaldi usó cuentas de banco extranjeras para desviar los sobornos. Dijeron que su modus operandi era: camuflar el trabajo con facturas por servicios que nunca fueron prestados.

Monzón también abandonó el país. Por haber colaborado con las autoridades, [fue dejado en libertad](#) en junio de 2017 y se fue de Guatemala poco después.



3. El “pecado original” del presidente Jimmy Morales y de Guatemala

Héctor Silva Ávalos y Steven Dudley

Apenas cinco meses después de haber jurado como presidente de Guatemala, Jimmy Morales ya estaba en problemas. El 5 de mayo de 2016, un auditor de la autoridad electoral concluyó que el partido del mandatario había desobedecido varias leyes sobre financiamiento recibido durante la campaña.

Uno de los principales problemas para el auditor del Tribunal Supremos Electoral (TSE) era que la contabilidad del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido que llevó al neófito Morales a las cumbres más altas de la política guatemalteca, registraba muy poco dinero en sus cuentas, algo muy raro en un país cuya historia electoral reciente indica que las campañas presidenciales cuestan entre US\$7 y US\$12 millones. El FCN-Nación apenas reportó, a mayo de 2016, unos US\$640.000 en gastos estimados de campaña electoral.

El auditor del TSE descubrió que el FCN-Nación no presentó todos los reportes mensuales y bimestrales que por ley debía entregar a la autoridad, y los reportes que sí entregó estaban incompletos. Había, por ejemplo, “informes financieros sin firmas de los responsables (...) informes con errores en los datos numéricos (...) falta de información de candidatos en el interior de la República (...) falta de documentación contable sobre ingresos”, dice el informe de mayo de 2016.

De hecho, el FCN-Nación no entregó ningún informe financiero al TSE cuando se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en septiembre de 2015, ni durante la segunda vuelta en octubre, ni en noviembre. El FCN-Nación simplemente dejó de reportar sus ingresos.

Una contadora contratada por el FCN-Nación durante la campaña de 2015 dijo luego a los fiscales que había renunciado porque las autoridades del partido le habían dejado de enviar información sobre el dinero o los donantes.

“Estuve trabajando desde finales de 2008 (...) hasta el mes de mayo de 2016 (...) una de mis funciones era que tenía que recibir al delegado del TSE (...) En los meses en que no se presentaron los informes al Tribunal fue porque no contaba con la información para trabajar los informes (sic) requeridos”, dijo la contadora Ana Gloria Josefina Pérez Monterroso en su declaración como testigo en la sede fiscal en enero de 2017.

El expediente que el MP abrió a partir del reporte del TSE terminaría arrojando pistas sobre otros posibles delitos atribuibles al presidente Morales. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a InSight Crime, por ejemplo, que Morales firmó cheques de las cuentas del FCN-Nación siendo Presidente de la República, algo que la ley no permite, y que el partido mantuvo cuentas de campaña abiertas al menos hasta octubre de 2016 cuando tendría que haberlas cerrado en abril de ese año.

En agosto de 2017, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), basados en aquella primera denuncia del TSE, habían concluido la primera investigación por posible financiamiento electoral ilícito contra el presidente Morales y su partido. El 25 de ese mes, la CICIG y el MP presentaron al Congreso la primera solicitud de antejuicio contra el presidente y pidieron que se le removiera la inmunidad.

Las autoridades del partido le habían dejado de enviar información sobre el dinero o los donantes.

Lejos quedaban, entonces, los días en que Jimmy Morales, el aspirante a presidente, se vendía a los guatemaltecos como el candidato anticorrupción; como la alternativa al gobierno de su antecesor, Otto Pérez Molina, quien para agosto de 2015 estaba a un paso de renunciar y ser arrestado por su presunta implicación en un masivo esquema de corrupción en las aduanas del país y por su propio escándalo por financiamiento ilícito de su campaña en 2011.

La ironía era que Jimmy Morales empezó a acercarse al poder en gran parte porque su antecesor había caído en desgracia, pero parecía que el nuevo aspirante a presidente no aprendió de los errores de Pérez Molina. Para mediados de 2015, miles de guatemaltecos llevaban ya casi dos meses llenando calles y plazas en protesta por la corrupción del gobierno Pérez Molina. Casi al mismo tiempo, el partido de Morales había decidido dejar de reportar sus ingresos a las autoridades.

Y empezaron entonces los grupos de poder de Guatemala a rondar al flamante candidato con donaciones por debajo de la mesa.

El candidato empieza a atraer al dinero

James Ernesto Morales Cabrera cambió su nombre legal por el de Jimmy Morales en 2011, casi un año antes de que el coronel retirado Edgar Justino Ovalle lo invitara a formar parte del FCN-Nación, un partido dominado por evangélicos y militares vinculados con oficinas de inteligencia castrense. Ovalle fue elegido a la Asamblea Legislativa para el periodo 2016-2020, fue nombrado jefe de la bancada de su partido y se convirtió en una de las voces más cercanas al presidente Morales.

En 2011, ambos hombres apenas estaban empezando sus carreras políticas. Morales era un neófito sin afiliación partidista.

Antes de mayo de 2015, cuando fue nominado candidato presidencial y después de haber pasado por la secretaría general de su partido, en la hoja de la vida política de Morales apenas asoma una desafortunada participación como candidato a alcalde Mixco, uno de los suburbios más populosos de la capital, en las elecciones de septiembre de 2011. Quedó en tercer lugar, con apenas el ocho por ciento de los votos, muy lejos del ganador.

Y antes de incursionar en política, Morales había pasado como comediante por la televisión local, por varios centros escolares de orientación cristiano-evangélica y por la Universidad San Carlos, donde estudió Comunicaciones, fue maestro y trabó relación con [Jafeth Cabrera](#), quien había sido rector de la universidad pública en los noventa, antes de iniciar su carrera política, y eventualmente correría con él como candidato a la vicepresidencia.

Escuche nuestro podcast [“El buen alumno”](#)

De los años en la USAC le vienen en parte a Jimmy Morales las conexiones que lo terminaron vinculando al FCN-Nación, un producto político surgido de la necesidad de varios exoficiales del ejército de crear una plataforma que les permitiera bajar el tenor de la incipiente persecución penal emprendida por el Estado guatemalteco contra militares implicados en crímenes de lesa humanidad durante los 40 años de la guerra civil.

El FCN-Nación inició siendo la manifestación política de esa batalla que algunos exmilitares siguen librando en las cortes. De ahí la importancia de miembros como el excoronel Ovalle, para quienes el partido se convirtió, más que en un mecanismo de defensa, en una forma de sobrevivencia. (La carrera legislativa del exmilitar ha quedado en suspenso luego que la Corte de Constitucionalidad aprobara un antejuicio para despojarlo de su inmunidad para que responda por casos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto interno en Guatemala que terminó en 1996).

Morales aparecía como un rostro amable para esa plataforma: sus años en televisión le habían hecho amigo de las cámaras y le habían dado un discurso convincente aunque poco profundo. Podía ser serio o simpático según la ocasión, era un hombre religioso, estudiado y con poderosos exmilitares como aliados. Sus posibilidades, sin embargo, parecían remotas, como cuando fue candidato para la alcaldía de Mixco.

Morales se enfrentaba a los herederos del poder político que había gobernado el país entre 2008 y 2012 bajo la bandera de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) del expresidente Álvaro Colom. Sandra Torres, exesposa de Colom, competía con la parte que le tocaba de aquella herencia política.

Manuel Baldizón, disidente de la UNE, competía acuerpado por viejas conexiones y financistas de dudosa reputación ligados al aparato estatal en su partido Libertad Democrática Renovada (Líder). El dinero al que tuvo acceso dio a Baldizón la posibilidad de empezar a promocionarse inmediatamente después de las elecciones de 2011.

Para junio de 2015, a poco más de un mes de su postulación como presidenciable, Morales apenas arañaba menos del 10 por ciento de preferencias entre el electorado de acuerdo con [un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales \(FLACSO\)](#); Baldizón tenía cerca de 25 por ciento de preferencias y Sandra Torres cerca de 13 por ciento.

La desintegración de la gestión de Pérez Molina ... llegó en el momento casi perfecto para la campaña.

Los rumores sobre las dudosas fuentes de financiamiento de Baldizón se habían esparcido y a mediados de julio, el MP y la CICIG anunciaron que estaban investigando a [Edgar Barquín](#), candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Líder, a su hermano y a otros por lavado de dinero.

Al mismo tiempo la administración de Pérez Molina iba en caída libre: en abril, el Ministerio Público había acusado al secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti de liderar una red de corrupción en las aduanas. Las protestas callejeras habían aumentado. En agosto, Baldetti renunció y crecía la presión para que Pérez Molina hiciera lo mismo.

Para entonces, Morales había subido en las encuestas. El dinero para la campaña del FCN-Nación había empezado a fluir. Ya para septiembre, Morales rondaba el 25 por ciento de preferencia y Baldizón había bajado al 20 por ciento. Las tendencias en las encuestas mostraban que los candidatos estaban yendo en direcciones opuestas.

Muchos atribuyeron el rápido ascenso al momento oportuno que fue aprovechado por Morales. La desintegración de la gestión de Pérez Molina entre abril y septiembre llegó en el momento casi perfecto para la campaña. Además, los otros principales

candidatos se veían como más de lo mismo, mientras que parecía que Morales traería cambios. Y los cargos contra el compañero de fórmula de Baldizón arruinaron su campaña.

La puerta estaba abierta y Morales tomó ventaja. El lema “ni corrupto, ni ladrón” era pegador, dijo Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala.

No importaba que Morales ya estaba cometiendo algunos de los mismos crímenes que habían llevado al asediado gobierno de Pérez Molina al poder.

“No hubo (en 2015) reformas que pudieran impactar (y) las prácticas iban a reproducirse. Además que en ese entonces nunca se pensó que los intocables serían investigados”, dijo Díaz. Y este sería, de hecho, el pecado original de Morales, su partido y sus donantes.

Las primeras alarmas

Lo cierto es que el dinero para la campaña siguió fluyendo, aun cuando el partido no lo registrara.

Una de las cosas que ya a esas alturas había llamado más la atención de las autoridades electorales y de las organizaciones independientes era que la publicidad que Jimmy Morales y el FCN-Nación parecían estar pagando a los medios de comunicación guatemaltecos no se correspondía con los raquíuticos reportes contables que el partido enviaba, y estos últimos no casaban con los reportes que, por obligación legal, los medios enviaban a las autoridades.

Entre mayo y el 5 de septiembre de 2015, el partido había gastado unos US\$77.000, según un estudio realizado por la organización Acción Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil. El monto era mucho menor a los gastados por sus principales contendientes.




Después del 5 de septiembre y hasta la realización de la segunda vuelta a finales de octubre, el FCN-Nación gastó US\$32.300, poco más de un tercio de lo gastado por Sandra Torres.

La falta de información sobre los gastos en publicidad fue solo una de media docena de advertencias que el TSE envió al FCN-Nación entre julio de 2015 y principios de 2016. El partido decidió ignorar esos avisos.

Ya en julio de 2015, cuando algunos periodistas empezaron a lanzar algunos cuestionamientos sobre el origen del dinero, el entonces popular candidato Morales apelaba a las donaciones de miembros de su partido y a su propia fortuna personal para explicar el financiamiento de su candidatura.

En una entrevista con [La República](#), Morales dijo que podía valorar su imagen en mucho dinero, algo que, aseguró, había logrado “trabajandito, con reputación. Soy honorable, no soy corrupto ni ladrón”, aseguró.

Guatemala: Gasto de campaña

Candidato	 Jimmy Morales	 Sandra Torres	 Manuel Baldizón
Gasto Enero- Abril	US\$ 0	US\$ 57.024	US\$ 235.784
Gasto May 2- Sept 5	US\$ 77.235	US\$ 1'407.823	US\$ 6'441.575
Votos primera vuelta	1'167.030	967.242	961.284
Puesto	1	2	3
Gasto septiembre	US\$ 32.287	US\$ 85.528	US\$ 0
Votos balotaje	2'292.251	1'328.381	N.A.
Puesto	1	2	N.A.

Fuente: *Doses, con Información de Acción Ciudadana y TSE* insightcrime.org

En concreto, dijo que hasta a julio había gastado cerca de US\$640.000 de su propio dinero en la campaña. A la luz de las investigaciones posteriores del TSE, hoy queda claro que los números del presidente no cuadran. De acuerdo con los reportes de la autoridad electoral, ese es el total que el partido gastó en toda la campaña; de hecho, el tribunal no pudo identificar el origen del 90 por ciento de los fondos.

El TSE, además, no encontró identificación del origen de cerca de 90 por ciento de los fondos reportados verbalmente por Morales y en los libros de su partido.

InSight Crime habló en Guatemala con tres fuentes distintas, cercanas todas a las investigaciones por financiamiento electoral ilícito a Morales y su partido, sobre los orígenes del dinero que el candidato del FCN-Nación empezó a recibir a partir de la segunda mitad de 2015.

Las informaciones coinciden en que el financiamiento provenía de tres fuentes distintas: los grupos corporativos de iglesias evangélicas con las que Jimmy Morales y el FCN-Nación estaban relacionados, del grupo de exmilitares que vieron en el partido político una forma de contestar a las acusaciones que pesaban contra ellos

por crímenes de guerra y, como se sabría tres años después, de varios empresarios influyentes de Guatemala.

(Tras la elección presidencial se supo de otra posible fuente de dinero. En noviembre de 2016, un narcotraficante guatemalteco dijo a investigadores estadounidenses que [había dado US\\$500.000 al hijo del vicepresidenciable Jafeth Cabrera](#) durante la campaña de 2015. Actualmente El Fantasma cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos y sus acusaciones permanecen sin confirmar.)

Todos estos apoyos financieros a la campaña de Jimmy Morales son ya un lugar común en la política en Guatemala, de acuerdo a un investigador que habló en condición de anonimato. Dijo que quienes dieron dinero vieron “una oportunidad para invertir así luego podrían pedir al candidato que ganara que les devolviera el favor”.

Para finales de octubre, ya era claro que tendrían su oportunidad. Después que Baldizón fuera eliminado de la primera ronda, Morales y Torres se enfrentaron en la segunda.

Aun con el mismo mantra anticorrupción que su oponente, Torres no tenía chance. El 25 de octubre, Morales ganó con 67,4 por ciento del total de los votos, 35 por ciento más que Sandra Torres.

La espiral que amenaza al presidente

Tomó hasta finales de 2016 para que el FCN-Nación se diera cuenta de que la investigación del TSE y el MP eran serias. El partido comenzó a cubrir sus huellas. Contrató a una firma de contadores y les pidió que reconstruyera sus libros contables de la campaña.

No fue fácil. Había meses en los que el partido no había registrado pagos, no había recibos ni auditorías, no había resúmenes de banco que tuvieran relación con sus gastos reales y tenían pocos recibos. Cuando los contadores encontraron huecos, los investigadores dicen que falsificaron documentos, usualmente cambiando las fechas de forma ilegal y firmandolos.

En total, las autoridades están investigando unas 65.000 transacciones realizadas en al menos tres bancos guatemaltecos, la mayoría entre junio y noviembre de 2015.

Por ejemplo, los investigadores del MP dijeron que encontraron recibos cuestionables por pagos hechos a través de una cuenta del banco G&T Continental.

Un recibo era por dos cheques por poco más de US\$30.000 firmados por [Rafael Díaz Samos](#), dueño de varias compañías constructoras que también estuvieron vinculadas a casos similares de financiamiento electoral ilícito en 2011.

Cuando los investigadores del MP le preguntaron por los cheques, Díaz Samos testificó que nunca hubo recibos por ellos. Cuando la firma contable del FCN-

Nación encontró un recibo fechado en junio de 2015, los investigadores volvieron a preguntar; Díaz Samos reiteró su respuesta. Para el FCN-Nación había, además, otro problema: el recibo había sido firmado por otro contador, no el que el partido tenía cuando Díaz Samos hizo la donación a la campaña de Jimmy Morales.

Las irregularidades seguían apareciendo. Jimmy Morales continuó firmando cheques de la cuenta de campaña del FCN-Nación hasta abril de 2016, cuando tendría que haberlo dejado de hacer en enero, al tomar posesión como presidente de la República.

El MP también advirtió que las cuentas de campaña del FCN-Nación habían estado abiertas hasta octubre de 2016, algo no permitido por la ley electoral guatemalteca.

Cuanto más creció la investigación, las autoridades continuaron descubriendo actividad sospechosa.

La lista de donantes del FCN-Nación incluía a personas que terminaron vinculadas al gobierno del presidente Morales. El caso más emblemático es el que involucra a Fanny Finisterre de Domínguez y Francisco Estrada Domínguez, madre y hermana de Julio Héctor Estrada Domínguez, a quien Morales nombró ministro de Finanzas. (Julio Héctor renunció en protesta por los embates de Morales contra CICIG, pero su renuncia no fue aceptada en un primer momento). La familia hizo una donación a la campaña de Morales a través de una de sus empresas, la constructora Pedreiro.*

(En un intercambio de correos electrónicos con InSight Crime después de la publicación original de este artículo, el ministro Estrada Domínguez defendió la donación hecha por su familia y dijo que no representa un conflicto de interés. “No veo como servir formalmente como funcionario público puede ser un conflicto de interés. Uno cree en una idea y en una oportunidad de servir. La apoya formalmente y luego además asume el reto con los riesgos que implica”, escribió. Vea el intercambio completo [aquí](#)).

Entre otras personas que recibieron fondos de las cuentas del FCN-Nación están Edgar Ovalle, el ex militar que apadrinó la candidatura de Morales y fue jefe de la bancada legislativa del partido hasta que tuvo que enfrentar a la justicia por supuestos crímenes de lesa humanidad. Hay reportados egresos por unos US\$20.000 para Ovalle de una cuenta del partido.

Las conexiones con el PP encendieron más alarmas.

También salió de una cuenta del FCN-Nación una cantidad similar para Estuardo Galdámez, en su momento primer secretario del FCN-Nación y administrador de la compañía [Agromec](#), una empresa que había sido contratista del Estado en la reparación de carreteras. Galdámez es también exmilitar y estuvo vinculado con el Partido Patriota (PP) de Pérez Molina y Baldetti.

Las conexiones con el PP encendieron más alarmas. Y aunque Pérez Molina y Baldetti habían terminado en la cárcel, las investigaciones al partido y otros operadores continuaron. Esas pesquisas arrojarían más conexiones problemáticas entre la mafia saliente y el nuevo gobierno del FCN.

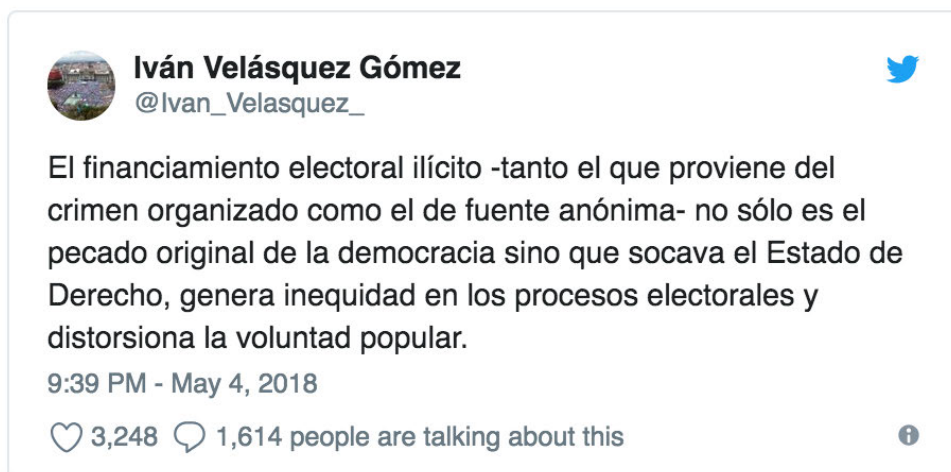
InSight Crime trató de comunicarse con el presidente Morales a través de su vocero, José Alfredo Brito, quien dijo que llevaría al mandatario la petición de una entrevista. Al final, no hubo respuesta.

Jimmy Morales va a la guerra

El 26 de agosto de 2017, Jimmy Morales se paró ante una cámara para hacer un anuncio.

“En el ejercicio de mis facultades constitucionales... como presidente de la República de Guatemala, por los intereses del pueblo... y el fortalecimiento de la institucionalidad, declaro non-grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado (de la CICIG)”, dijo Morales en un corto de vídeo de 1 minuto y 44 segundos que luego subió a un canal de [YouTube](#).

Iván Velásquez es el exmagistrado colombiano que dirige la CICIG desde 2013 y se ha convertido en el principal enemigo de las élites políticas y económicas de Guatemala. Es él quien ha dicho que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la política guatemalteca.



El mismo día el presidente firmó un documento en el que ordenaba a Velásquez que “abandone la República de Guatemala”. Un día después, el 27 de agosto, el presidente ordenó a su ministra de Relaciones que hiciera cumplir su mandato “dentro del marco legal y diplomático”.

La guerra había empezado dos días antes, cuando la CICIG y el MMP pidieron al congreso el retiro de la inmunidad del presidente para que respondiera legalmente por más de US\$900.000 recibidos por su partido durante la campaña presidencial

y no declarados a la autoridad electoral como manda la ley. Esto fue con base a la investigación MP510-2013-278 del MP que había sido abierta oficialmente en mayo.

El asunto había adquirido un cariz personal para el presidente cuando, en 2016, la CICIG y el MP abrieron una [investigación al hijo y hermano del presidente](#) por un asunto en apariencia menor: la compra no facturada de canastas navideñas por unos US\$24.000 de una pequeña oficina del gobierno mucho antes de que Morales fuera presidente. Los [cargos parecían exagerados](#) e hicieron que el presidente y sus seguidores montaran en cólera.

Pero no fue sino hasta la petición de antejucio contra él, cuando el presidente emprendió una guerra abierta contra la CICIG y el MP, que entonces dirigía Thelma Aldana, a través de las instituciones y en alianza con otros miembros de las élites también investigados, como Álvaro Arzú, el expresidente del país y exalcalde de la capital, quien falleció en abril de 2018 en medio de una investigación que lo implicaba con supuestos [actos de corrupción en la municipalidad](#). Arzú fue, hasta su muerte, un poder importante detrás de Jimmy Morales, uno que quiso retroceder el tiempo a las épocas en que las élites no tenían que responder por sus actos.

Pero Velásquez también tenía aliados. Estados Unidos, el principal financista de la CICIG, ha mantenido su apoyo al colombiano. El día siguiente de ser declarado persona non grata, el Procurador de Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que suspendiera la declaratoria firmada por el presidente. El frenesí llegó entonces a la CC, según dos funcionarios que conocieron las interioridades de lo que sucedió el domingo 27, cuando ese tribunal mandó a llamar a los magistrados para resolver la petición de Rodas. La corte resolvió en contra del presidente por tres votos contra dos.

El comisionado se quedaría y el presidente no se lo tomó a bien.

Una de las fuentes -que hablaron con InSight Crime en condición de anonimato por razones de seguridad- recuerda que entre algunos en el órgano judicial rondó el temor de que Morales declarara Estado de excepción, algo que no ocurrió.

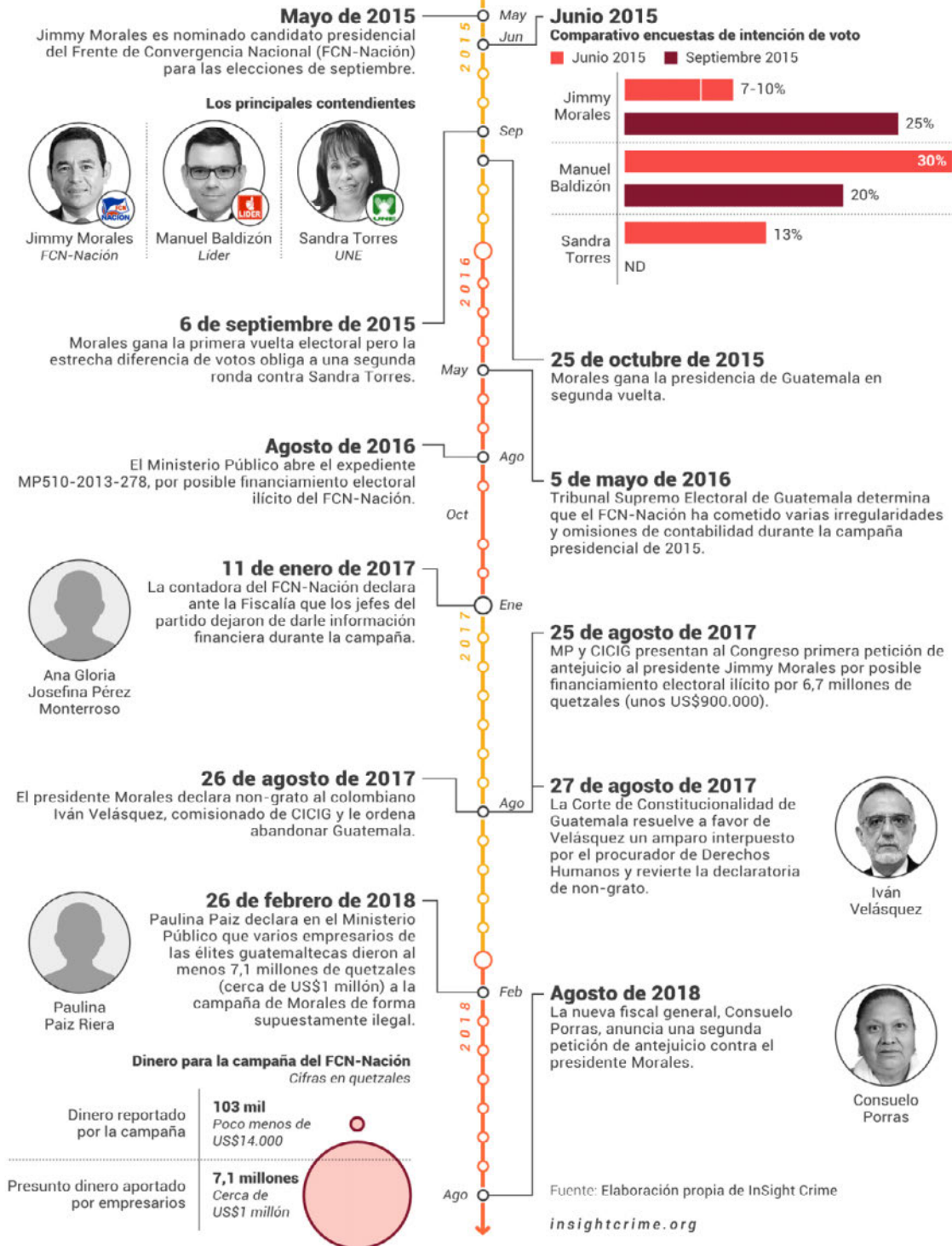
Después que este primer intento por acabar con la CICIG fue detenido, el presidente comenzó una campaña más silenciosa contra la comisión.

Al centro de este esfuerzo está Javier Hernández, el político que asumió la secretaría general del FCN-Nación tras los problemas legales del excoronel Ovalle Maldonado. Hernández tenía sus propios problemas legales, y además su firma aparecía en los cheques para la campaña del partido, la CICIG y el MP le atribuyen no haber informado sobre los orígenes de al menos unos US\$400.000.

En septiembre de 2017, a poco de que la CICIG y el MP habían pedido el antejucio al presidente Morales por financiamiento electoral ilícito, Hernández encabezó [un intento por modificar las leyes guatemaltecas](#) tendientes a suavizar castigos a

funcionarios y políticos acusados de actos de corrupción. Entre otras cosas, las reformas pretendían librar a los secretarios generales de los partidos, como él, de responder por dudas sobre financiamientos electorales; la propuesta de los cambios era que solo respondieran los contadores. Esa iniciativa en el Congreso, que recibió fuertes críticas del público y la comunidad internacional, fue bautizada por la prensa guatemalteca “Pacto de Corruptos”.

La espiral que amenaza a Jimmy Morales



También en septiembre, Hernández encabezó un esfuerzo por botar cualquier posibilidad de que el Congreso retirase la inmunidad al presidente Morales. En dos ocasiones, el secretario general del FCN-Nación logró blindar a su jefe.

Ya para enero de 2018, Jimmy Morales había sumado un nuevo aliado en el Congreso. Empujado por su padre, el alcalde Arzú, y por el FCN-Nación de Javier Hernández y el presidente, Álvaro Arzú Escobar asumió a principios de año la presidencia del Congreso.

Morales, además, había despedido de su gobierno a funcionarios que estaban trabajando de la mano con CICIG, como el ministro de Gobernación y el [jefe de la oficina recolectora de impuestos](#). Parecía que el jefe del Ejecutivo guatemalteco podía respirar tranquilo, pero faltaban aún más sorpresas en las chisteras de la CICIG y el MP.

El FCN-Nación y las élites

A inicios de diciembre de 2016, la fiscalía guatemalteca pidió la inmovilización de 12 propiedades.

Los investigadores encontraron rastros de papeles quemados, pero también pistas que los llevaron a otras bodegas e instalaciones industriales y oficinas de empresas relacionados con las tramas de corrupción durante la administración de Pérez Molin

“Un allanamiento nos llevaba a otro...”, cuenta un investigador que participó en aquellas pesquisas.

De a poco, la CICIG y el MP armaron un rompecabezas que hablaba sobre sobornos de empresarios y cobro de coimas por proyectos de construcción. Las autoridades bautizaron el caso como “Construcción y Corrupción” y ubicaron a la cabeza de la red: Alejandro Sinibaldi, quien había sido ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Pérez Molina.

Hace tiempo que no se sabe de Sinibaldi. La última vez que se le vio en público fue dando una entrevista vía Skype desde la India, cuando habló sobre sus contactos con otros partidos políticos.

Pero el caso Contrucción y Corrupción abrió otra avenida de investigación en el caso de financiación de campaña del FCN-Nación.

Los investigadores descubrieron que dos compañías relacionadas con Sinibaldi, Inversiones Delta y Multitek, donaron US\$18.600 a la campaña Multitek, que era administrada por Jhonatan Chévez, alias el “El Mago”, implicado en un caso de corrupción durante la gestión de Pérez Molina.

En varios de los allanamientos los investigadores obtuvieron información del Movimiento Cívico Nacional (MCN) y de posibles donaciones ilícitas al FCN-Nación y Morales. El MP y la CICIG abrieron una nueva línea de investigación, que a la

postre bautizarían como la [fase 2 del caso por financiamiento electoral ilícito](#) que ya involucraba al presidente.

Estaban pagando el derecho de picaporte como decimos en Guatemala... por contratos, por ministerios clave.

Así como la primera fase, la segunda se había construido a partir de información desde el interior del esquema. El 26 de febrero de 2018, Paulina Paiz Riera, miembro de una de las familias más poderosas de la élite guatemalteca, brindó declaración como testigo en la Fiscalía de Delitos Electorales del MP. La mujer presentó documentos que probaban que varios empresarios, entre los más influyentes del país, habían hecho donaciones no permitidas a la campaña de Morales.

Paiz detalló que el 19 de agosto de 2015, cuando ya el FCN-Nación punteaba en las encuestas y la administración Pérez Molina estaba por colapsar, el entonces candidato Morales y el excoronel Ovalle se reunieron con varios miembros de la familia Paiz y otros empresarios para acordar donaciones que servirían al partido para pagar fiscales de mesas electorales por parte de algunas de las familias de mayor alcurnia del país. Las donaciones se harían a través de la empresa Novaservicios, administrada por Paulina Paiz, a cuentas de cheques proporcionadas por Ovalle.

En total, los empresarios aportaron cerca de US\$1 millón para el pago de fiscales, pero el FCN-Nación solo había reportado unos US\$14.000 para ese rubro en la primera y segunda vueltas electorales.

“Los pagos fueron realizados directamente por las empresas (...) a los fiscales del partido y el gasto no fue reportado al TSE, lo que constituye financiamiento electoral ilícito”, concluyeron la CICIG y el MP en [una conferencia de prensa celebrada](#) el 19 de abril de 2018, poco antes de la salida de Thelma Aldana de la Fiscalía.

Los empresarios nombrados por Paulina Paiz decidieron desmarcarse de inmediato con una estruendosa conferencia de prensa en la que leyeron un comunicado en el que aceptaban haber realizado las donaciones a Morales y pedían disculpas a los accionistas de sus empresas y al país.

“El carácter de las personas no se conoce en los errores, sino en la forma en cómo los enfrentamos y de qué aprendemos de ellos, asumiendo un firme y claro compromiso de no volver a cometerlos. Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala...”, decían los empresarios en su carta.

Uno de los empresarios contactó a InSight Crime poco después de la publicación del comunicado. No quiso que se le citara por nombre y se dedicó a intentar contextualizar el momento en que hicieron donaciones, enfocándose en Baldizón y su partido Líder.

Baldizón, quien luego fue [arrestado en los Estados Unidos](#) por su presunta participación en el capítulo guatemalteco del escándalo de corrupción internacional relacionado con la constructora brasileña Odebrecht, era un candidato que generaba

preocupación. Sus presuntos vínculos con oscuras fuentes de financiamiento habían llamado la atención de los Estados Unidos, que había empezado a mandar señales de que no le simpatizaría una eventual administración Baldizón.

“Actuamos rápido y no fuimos diligentes. Líder -el partido de Baldizón para las elecciones presidenciales de 2015- estaba violando los límites (legales de financiamiento electoral)... (El FCN) era un partido pequeño que nos pidió ayuda”, dijo el empresario.

Cuando InSight Crime lo presionó para que explicara si habían verificado hacia dónde iba el dinero, si les habían dado recibos, o si habían vuelto a hablar con el FCN-Nación tras la elección, el empresario se excusó y colgó el teléfono.

Dos investigadores relacionados con el expediente del FCN-Nación son menos benevolentes al valorar la actuación de los empresarios.

“Estaban pagando el derecho de picaporte como decimos en Guatemala... por contratos, por ministerios clave... Los descubrieron y hoy aparecen arrepentidos”, dice uno de ellos.

La soledad del presidente



Jimmy Morales recibió la batuta presidencial en enero de 2016. Sus problemas legales por posible financiamiento electoral ilícito comenzaron a los pocos meses de su juramentación. FOTO: AP

En total, el Ministerio Público reclama al FCN-Nación y al presidente Jimmy Morales por no haber reportado el ingreso de unos US\$2 millones durante la campaña de 2015 y los primeros meses de 2016. En mayo de 2018, en la última conferencia que

dio como fiscal general, Aldana dijo que lo establecido por las investigaciones era suficiente para pedir otro antejuicio al presidente.

A pesar del cambio en su liderazgo, el MP ha mantenido la presión. El viernes 10 de agosto, María Consuelo Porras, la abogada que en mayo sustituyó a Aldana como jefa del MP, solicitó al Congreso un segundo antejuicio a Morales por presunto financiamiento electoral ilícito.

Había dudas sobre los compromisos de Porras: su esposo es un exmilitar y ella había sido jueza, no fiscal. Sin embargo, Porras ha dejado claro que seguirá confrontando el poder del presidente: flanqueada por el comisionado Velásquez de CICIG, la nueva fiscal general detalló en una conferencia de prensa que esta segunda petición de antejuicio tiene que ver con las revelaciones de Paulina Paiz y los pagos a fiscales de mesa en la campaña de 2015 con dinero aportado por los empresarios.

El círculo vuelve a cerrarse. Jimmy Morales, el candidato que se convirtió en presidente cuando Guatemala se retorció por la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, enfrenta hoy acusaciones similares a las que pesan sobre su antecesor. Parece que Morales no aprendió la lección: el financiamiento oscuro de su campaña fue su pecado original.

** Corrección: En el artículo original publicado del 23 de agosto se decía que Pedreiro era propiedad de otro ministro y que la compañía había recibido contratos del gobierno. Ambas afirmaciones son incorrectas. InSight Crime lamenta el error.*

La fundación InSight Crime

InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

InSight Crime tiene como objetivo comprender a profundidad el crimen organizado en el continente americano, mediante la investigación de campo y el análisis desde una perspectiva transnacional y con base en las políticas.

Cumplimos esta misión:

- Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el crimen organizado en la región;
- Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos, el gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, económicos y políticos;
- Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto, sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;
- Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando, traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más amplia;
- Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado;
- Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los obstáculos que hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en el terreno.

Para más información, visite es.insightcrime.org
O contáctenos a: info@insightcrime.org

InSight Crime
Centro de Investigación
de Crimen Organizado